**DERECHOS HUMANOS Y CONDICIONES
LABORALES DEL TRABAJO SOCIAL EN
PUERTO RICO: ASUNTOS MEDULARES
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
PROFESIONAL DEL COLEGIO DE
PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
DE PUERTO RICO**

Mabel T. López Ortiz

Posee un Doctorado en Filosofía, Ciencias de la Conducta, de la Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, 2004. Es Trabajadora Social en la Clínica de Niños y Adolescentes de ASSMCA; Trabajadora Social del Departamento de Consejería y Orientación Estudiantil, DCODE, Universidad de Puerto Rico; y Catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Esterla Barreto Cortez

Es catedrática de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle, donde coordina la concentración de Trabajo Social Comunitario. Tiene un doctorado en Política Social de la Escuela de Bienestar Social Florence Heller de la Universidad de Brandeis, en Massachusetts. Coordina el Estudio sobre las Condiciones Laborales de los y las Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social de la Región, que es un esfuerzo conjunto entre la Presidencia de América Latina de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) y el Comité Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS). Es la actual Coordinadora de la Región de Centro América, el Caribe y México de la ALAEITS.

Jessenia Rivera Ortega

Estudió Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y posteriormente realizó estudios de Maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, donde obtuvo el grado de Magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina. Es autora de diversos artículos publicados en la prensa escrita y del libro La Educación Popular, una alternativa para educar en Derechos Humanos: el caso de Puerto Rico, publicado en el año 2012. Actualmente es estudiante doctoral del Programa de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico y trabaja como Asistente de Investigación.

Recibido:

30 de mayo de 2014

Aprobado:

10 de septiembre de 2014

DERECHOS HUMANOS Y CONDICIONES LABORALES DEL TRABAJO SOCIAL EN PUERTO RICO: ASUNTOS MEDULARES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE PUERTO RICO

escrito por

**Mabel T. López Ortiz, Esterla Barreto Cortés
y Jessenia Rivera Ortega**

Resumen

Este artículo resume los hallazgos de dos investigaciones realizadas por las autoras a nombre del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, como parte de las gestiones en el desarrollo de nuestro Proyecto Profesional. La primera realizó un perfil de las condiciones laborales en las que se encuentran nuestros(as) colegiados(as), con un diseño de investigación de métodos mixtos. La segunda investigación es sobre el estado de los derechos sociales en Puerto Rico, a través del método cuantitativo.

Ambas investigaciones tenían el propósito de obtener información valiosa relacionada con los objetivos medulares del Proyecto Profesional del CPTSPR, entre estos, trabajar en la defensa de los derechos humanos; la formulación de políticas sociales que promuevan la justicia y la equidad; y el mejoramiento

de las condiciones laborales de los(as) profesionales del Trabajo Social. El objetivo de este artículo es que nuestra matrícula colegiada esté informada sobre los hallazgos de ambas investigaciones y su relación con el Proyecto Profesional que se construye para todos.

Palabras claves: derechos humanos, Proyecto Profesional, condiciones laborales del Trabajo Social.

Abstract

This article summarizes the findings of two research reports conducted by the authors on behalf of the College of Social Work Professionals of Puerto Rico, as part of the efforts in the development of our Professional Project. The first study provides a profile of the working conditions found in our professional practice by using a mixed methods research design. The second study was about the state of social rights in Puerto Rico, using a quantitative method. Both studies were designed to obtain valuable information related to the core objectives of the CPTSPR Professional Project. Among these are: the defense of human rights; the development of social policy that promotes social justice and equality; and improving the working conditions of Social Work professionals. The aim of this paper is to inform our membership the findings of both studies and their relation to our professional project.

Keywords: Human rights; Social Work Professional Project; Social Work labor conditions

Introducción

Desde el 2008, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) comenzó la reflexión y trabajos dirigidos a construir un Proyecto Profesional pluralista y democrático que responda a tiempos complejos, en los cuales la falta de justicia social y económica violenta a diario nuestros derechos humanos y precariza la práctica del Trabajo Social. Esta gestión surge de las ideas de compañeros(as) de nuestro Colegio quienes, en la Asamblea de 2008, presentaron una Resolución a los fines de propiciar la participación activa y reflexiva de la matrícula en estos asuntos. Para ello se creó un Comité Especial, el cual eventualmente se convierte en la actual Comisión Permanente del Proyecto Profesional (Reglamento del CPTSPR, Cap. XVIII, Art. 58, 2013).

Cónsono a estos esfuerzos, la Comisión de Diversidad y Derechos Humanos asume la implantación de otra Resolución aprobada en Asamblea en el 2009, para realizar un estudio de la condición de los derechos humanos en Puerto Rico. Los trabajos de la Comisión Permanente del Proyecto Profesional y los trabajos de la actual Comisión Permanente de Acción Social y para la Defensa de los Derechos Humanos y la Inclusión, resultaron en la realización de estas investigaciones, de las cuales presentamos algunos aspectos en el presente artículo.

En este escrito, queremos llevar el mensaje de la importancia de la investigación social para el Trabajo Social, no tan solo en las dimensiones teórico-prácticas, sino también en el fortalecimiento de nuestra identidad profesional y nuestros propios derechos como ciudadanos(as), en la dimensión ético-política. Precisamente el Proyecto Profesional sostiene un compromiso con nuestros(as) colegiados(as) en la discusión de asuntos fundamentales como la defensa de los derechos humanos, el mejoramiento de nuestras condiciones laborales y

la concretización de políticas sociales que apunten a promover y alcanzar la justicia y la equidad (Resolución #5, 2008). Estos temas no deben discutirse de forma fragmentada sin vincularse como aspectos fundamentales en el desarrollo del Proyecto Profesional, que requieren y demandan una comprensión del contexto político, económico, cultural y social actual.

Las investigaciones que presentamos tenían el propósito de describir las condiciones laborales de los profesionales del Trabajo Social de nuestro país, y de estudiar el estado de los derechos sociales. Ambas se lograron con los esfuerzos de varias voluntades: estudiantes de Trabajo Social a nivel de bachillerato y maestría de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; Comisiones y Capítulos del CPTSPR; la Junta Directiva; y las presidencias del Colegio.

Trasfondo histórico de las voluntades

Las tensiones en toda profesión pueden resultar en experiencias difíciles, pero fundamentales para lograr fortalecer el ejercicio de una disciplina o profesión. Desde los comienzos de la discusión del proyecto ético-político del CPTSPR han surgido debates en distintas direcciones, propiciando que todos los sectores dentro de la profesión fundamenten sus ideas y propuestas. Compañeros(as) colegas han aportado artículos profesionales donde se discute la necesidad de repensar el Trabajo Social que demanda nuestros tiempos, para así reorganizar nuestro Proyecto Profesional criollo (Barreto, 2009; Cabrera, 2012; Centeno, 2010; Colón, 2010).

Colón (2010) afirmaba que la creación de un proyecto ético-político en el contexto histórico y presente es una situación de “vida o muerte”, donde nos jugamos los espacios profesionales

frente a la desaparición del Estado benefactor y las violentas políticas neoliberales, condiciones que apuntan a trastocar los derechos laborales de nuestra profesión. En este contexto, no están seguras ni las personas con quienes trabajamos, ni la profesión misma. Por esta razón, desde los inicios y desarrollo de la construcción del Proyecto Profesional, el compromiso del Colegio se ha dirigido, entre otros asuntos, a atender el problema de la creciente precariedad en las condiciones laborales de su matrícula. A fin de lograr el mejoramiento de las condiciones laborales de nuestra clase profesional, hemos querido levantar un perfil de las realidades laborales de nuestros colegiados(as) en los diversos escenarios de la práctica.

En estos tiempos nos enfrentamos a la desprofesionalización del Trabajo Social o la ruptura de lo que ha sido o representado la profesión desde su génesis. Se desplaza nuestra intervención a otros espacios laborales y desaparece el Estado benefactor, junto con las políticas sociales redistributivas (Colón, 2009) que se crean en virtud de derechos sociales adquiridos. Debido a todo eso, no nos quedan otras alternativas que estudiar críticamente los condicionamientos que esta situación representa para el ejercicio profesional, a fin de generar procesos que nos permitan insertarnos proactivamente en la defensa de la misma.

Es en esta dirección que surge la investigación sobre el perfil laboral de nuestra matrícula en el 2011.

Reconocemos a los(as) profesionales como protagonistas en estos procesos, en el entendido de que las transformaciones sociales no están dispersas o desarticuladas en el ambiente sin fundamentos, sino que se concretizan a partir de la agenda neoliberal que desestabiliza las condiciones laborales, haciendo vulnerable nuestra identidad como trabajadores(as) (Montaño, 2004).

La complejidad social y el entramado en las relaciones sociales en la actualidad se describen como “problemas sociales” complejos, resultado de la inequidad política y económica entre las personas, lo que limita o impide el acceso y disfrute de los derechos sociales a una mayoría de la población. Las políticas sociales, distantes de solucionar los problemas sociales, enmascaran y hacen invisible la “cuestión social”. La “cuestión social”, cuyas manifestaciones usualmente identificamos como problemas sociales, resulta de las contradicciones de un sistema capitalista amparado por la democracia liberal, en el cual cada vez más las diferencias de clases y grupos sociales en el orden económico, político y cultural resultan en diversidad de formas de explotación, opresión, desigualdad y pobreza (Ezquivel, 2004). Estas precisamente sostienen el sistema capitalista neo-liberal, situación que pone en jaque y en constante contradicción los principios del Trabajo Social y la dimensión ético-política de la profesión.

Altas tasas de desempleo, cambios y ambivalencias en los derechos adquiridos de los(as) trabajadores(as) del país, desaparición y reducción de servicios de atención social, diferentes manifestaciones de violencia, inseguridad física y emocional, aumento del nivel de pobreza y de distancia entre las clases sociales, se resumen a diario en la prensa del país (El Nuevo Día, 6 de junio, 2014; 11 de julio, 2014). El Trabajo Social como profesión se encuentra frente a estas condiciones, pero asumiendo la responsabilidad de un sistema de asistencia social empobrecido, en proceso de privatizar y mercantilizar los servicios sociales, y a su vez con mayor precariedad en nuestros propios empleos, desplazamiento de espacios de trabajo y vulnerabilidad de los derechos sociales. A pesar de que los derechos humanos parecerían ser el tema de nuestros tiempos, la realidad es que en nuestro país existe

poco conocimiento de cómo identificar y defender nuestros derechos, así como la importancia de que los mismos se reconozcan en nuestra Constitución para que adquieran un rango civil que facilite su acceso.

Los criterios que permiten el disfrute de todos los derechos humanos (DDHH) se adscriben a tener condiciones económicas solventes que puedan rentar los servicios que atiendan los mismos. Sin embargo, la realidad del pueblo puertorriqueño se distancia de tener una población con esas condiciones. Los derechos sociales como la salud, vivienda, educación, ambiente sano y seguridad, entre otros, no se disfrutaban y acceden de forma equitativa en Puerto Rico. Poblaciones diversas dependen del Estado en el disfrute de servicios mínimos que atiendan sus derechos “inalienables”, “inherentes” e “indivisibles”. El Trabajo Social entonces se vincula sustancialmente con los DDHH. Por un lado, la profesión nace de la lucha por el reconocimiento de los DDHH. Por otro, la defensa de los derechos humanos es un eje fundamental de la misma. Sin embargo, al momento también estamos vulnerables al poco acceso y disfrute de los mismos. Según Eroles (2007), en estos tiempos existen exigencias fundamentales para el Trabajo Social como sujetar el compromiso de una práctica claramente vinculada a los DDHH.

En reconocimiento a la relevancia de los DDHH para la profesión, en la Septuagésima Asamblea Anual del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (2009) se aprueba una Resolución para la promoción y elaboración de una investigación sobre el estado de los derechos humanos en el país. El CPTSPR asume el compromiso de incluir esta investigación en su plan de trabajo, considerando que un mayor conocimiento y una mayor comprensión de los derechos humanos mejorarán la actuación y las intervenciones de los(as) trabajadores(as) sociales en beneficio de quienes

necesitan sus servicios. En este momento, el esfuerzo de estudiar las condiciones laborales de nuestra matrícula no había comenzado a concretizarse.

La responsabilidad de realizar la investigación sobre el estado de los derechos humanos fue delegada a la entonces Comisión Permanente de Diversidad y Derechos Humanos, hoy nombrada Comisión Permanente de Acción Social y para la Defensa de los Derechos Humanos y la Inclusión, que acordó que el estudio debía ser producto de un esfuerzo colaborativo y participativo entre las diversas instituciones y organizaciones del país vinculadas a los asuntos de derechos humanos. Los esfuerzos se iniciaron con la creación de un Comité Extendido que incluyó a integrantes de la Comisión de Diversidad y Derechos Humanos del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, y representación de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Puerto Rico y Amnistía Internacional, Capítulo de Puerto Rico. Este esfuerzo no logró acciones concretas en la realización de la investigación, por lo que el CPTSPR asume la misma, pero considerando el estudio de la situación de los derechos humanos más pertinentes al Trabajo Social, en particular los derechos sociales.

Los hallazgos de las investigaciones realizadas reconocen que las condiciones laborales y los derechos humanos son dos ámbitos que ameritan estudio para la consecución y desarrollo de un Proyecto Profesional de Trabajo Social boricua. Ambas investigaciones tienen un carácter informativo importante para los futuros trabajos en el desarrollo desde nuestra organización y colectivo profesional.

Condiciones laborales y derechos sociales

La dirección del desarrollo del proyecto ético-político profesional del Colegio de Profesionales del Trabajo Social se vincula a los objetivos de promover: (a) el mejoramiento de nuestras condiciones de trabajo; (b) la defensa de los derechos humanos; y (c) la concretización de políticas sociales para promover la justicia y la equidad (Barreto & López, 2011). Para cumplir con estos objetivos, es necesario reconocer que los escenarios laborales donde se inserta el Trabajo Social han sufrido transformaciones y cambios que a su vez impactan la calidad, disponibilidad y el acceso y disfrute de los servicios sociales que se ofrecen en virtud y como garantía de derechos sociales adquiridos. En la revisión de literatura, encontramos varios estudios realizados sobre aspectos laborales del Trabajo Social en Puerto Rico como la supervisión, la satisfacción laboral, el “mobbing” y elementos prácticos en la diversidad de escenarios (Berlinger & Negrón, 2007; Rivera, Rodríguez & Serrano, 2013; Roa, Rosario & Vélez, 2003). Sin embargo, no había una descripción del perfil laboral en dicho momento histórico.

Para autores en Latinoamérica, el estudio de las condiciones laborales del Trabajo Social es un imperativo, ya que las transformaciones sociales han fortalecido estructuras violentas o lo que Fredianelli (2007) llama “violencia político-burocrática”. Estas condiciones laborales violentan por un lado los derechos de las personas con quienes trabajamos, pero a su vez atenta contra nuestros derechos laborales como profesionales. Sabemos que en tiempos de vivir los efectos del neoliberalismo, carecemos de servicios (servicios y programas donde está insertado el trabajo social), se precariza el trabajo y empeoran las condiciones laborales. La inestabilidad laboral no tan solo se empeora con la desaparición de derechos adquiridos y los bajos salarios, sino también se nos desplaza con políticas

para fomentar el voluntariado y los servicios desde el llamado “tercer sector” (Colón, 2009). A esto se suma el elemento de nuestra relación colonial con los Estados Unidos, la cual nos deja un pobre margen de movimiento autónomo en la solución de nuestros problemas o el enfrentamiento a nuestra “cuestión social-colonial”. Tanto la condición de nuestros espacios laborales como el estado de los derechos sociales en Puerto Rico están ceñidos al contexto político, económico y cultural de ser una colonia.

Los derechos humanos en la actualidad han sido vulnerados a escala mundial, por lo que organizaciones en todo el mundo se han comprometido con pactos internacionales que Puerto Rico no ha podido asumir dada nuestra relación colonial con Estados Unidos (The Global Agenda, 2012). En el 2011 (y desde 1998) el CPTSPR luchaba, con el apoyo de países latinoamericanos, por defender la integración de nuestro país a la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), con la oposición de la National Association of Social Work de los Estados Unidos, bajo el argumento de que estábamos representados por dicha asociación ante organismos internacionales. Esto es un ejemplo importante de reconocimiento del contexto particular de nuestra profesión y de nuestra capacidad de incidir sobre la misma a nivel nacional e internacional. Estas nuevas relaciones y reconocimientos internacionales nos proveen de nuevos mecanismos para fortalecer un Proyecto Profesional protector y defensor de los derechos humanos. Sin embargo, requiere elaborar otros elementos.

La interdependencia es un principio general de los derechos humanos. No obstante, la acción de traducirlo a lo práctico ha estado limitada debido a debates y contradicciones. Plantea Ligia Bolívar que “históricamente, hemos sido herederos de una tradición que nos ha dicho, durante muchos años, que los derechos civiles y políticos, por su naturaleza y características,

son distintos a los derechos económicos, sociales y culturales” (s.f., p.91). Bajo el pretexto de los recursos disponibles del Estado, el cumplimiento y satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, tan fundamentales para asegurar y reproducir la vida individual y colectiva, han estado condicionados por factores mayormente económicos e ideológicos y han dependido de la discreción de los gobiernos. Esto sugiere una “división artificial de los derechos, de que mientras todos los derechos civiles y políticos son de aplicación inmediata, todos los derechos económicos, sociales y culturales deben esperar, como condición previa para su satisfacción, la disponibilidad de recursos estatales suficientes” (Bolívar, s.f., p.102).

A pesar de que el Derecho Internacional ha dado paso al reconocimiento y desarrollo normativo de los derechos económicos, sociales, culturales, considerándoles como derechos igualmente fundamentales desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, “el concepto de derechos humanos y lo relacionado a su violación es asociado mayormente a hechos como la represión, la censura, la violencia política y abusos de los cuerpos de seguridad” (Bolívar, s.f., p.136). Muy pocas veces se asocian con la violación y negación de los derechos humanos el desempleo, la criminalidad, la desatención y pobre calidad de los servicios educativos, el alto costo de los servicios médicos, la contaminación del aire y los cuerpos de agua, la falta de acceso a una vivienda digna y la desigualdad o la pobreza. Todas son condiciones que antes describíamos como el contexto de la realidad social que vive nuestro país como parte de las justificaciones del desarrollo de ambas investigaciones y la construcción de nuestro Proyecto Profesional.

Generalmente, los derechos civiles y políticos, entre ellos, la libertad de expresión, el derecho a votar, el debido proceso

de ley, la no discriminación, la libertad de prensa, la libertad de culto, la libertad de organización y movimiento, el derecho a la propiedad privada, han logrado exclusivo posicionamiento en el ordenamiento jurídico y normativo de los países con un sistema democrático liberal y occidental (López & Rivera, 2014). Esto permite que los derechos civiles y políticos cuenten con mecanismos de protección que permitan, según Abramovich y Cortis (1997), la posibilidad de reclamar ante el sistema de justicia el cumplimiento, al menos, de algunas de las obligaciones que constituyen el objeto del derecho. Por el contrario, los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos, la salud, el trabajo, la educación, la seguridad, la cultura, la vivienda, la alimentación y un ambiente sano, no cuentan con un sistema de instituciones y mecanismos de protección tan desarrollados como los existentes para materializar los derechos civiles y políticos. Cabe señalar que en el caso de Puerto Rico, la Sección 20 de nuestra Constitución, la cual reconocía derechos económicos y sociales, fue eliminada por el Congreso de los Estados Unidos en el 1952.

Debido a los hechos históricos del desarrollo de esta investigación y a lo vulnerables que son los derechos sociales por no estar reconocidos en la Constitución o el sistema jurídico del país, decidimos limitarnos al estudio de estos derechos. De otro lado, la Resolución ratificada en la Septuagésima Asamblea Anual, 2009 para la realización del estudio de los derechos humanos en Puerto Rico, por el CPTSPR, reconocía que desde el 1959, no se realizaba ningún esfuerzo para tener este perfil o radiografía. Para el Trabajo Social, la multiplicidad de problemas sociales se vincula con la privación sistemática de los derechos, y la negación del derecho es, en un sentido global, lo que define el campo de actuación profesional (Eroles, 1997).

Estudio de las condiciones laborales y los derechos sociales: los métodos

El propósito general de la investigación sobre el Estado de los Derechos Sociales fue ofrecer información descriptiva sobre la situación actual de estos derechos en Puerto Rico. En específico, nos guiaron los objetivos de explorar los conocimientos que posee la población en Puerto Rico en cuanto al tema de los derechos humanos, en particular sobre los derechos a la seguridad, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y un medio ambiente sano, y cómo se percibe el estado de estos derechos y la función del gobierno o Estado con relación a los derechos sociales.

Por otro lado, la investigación o estudio de las condiciones laborales tuvo como propósito describir las condiciones laborales actuales de la profesión de Trabajo Social en Puerto Rico, ante la crisis creada al amparo de la Ley #7 de 2009, Ley Especial declarando Estado de Emergencia Fiscal y estableciendo un Plan Integral de Estabilización Fiscal para salvar el crédito de Puerto Rico, la cual justificó el despido de miles de empleados(as) del sector público.

El diseño de la investigación sobre derechos humanos fue uno no experimental transversal con enfoque cuantitativo. Se utilizó un cuestionario auto administrado que incluyó varias escalas para medir las variables de conocimientos y opiniones sobre derechos humanos en general, derecho a la salud, vivienda, medio ambiente sano, seguridad, trabajo y educación. Se utilizó una estrategia no probabilística, donde participaron de forma voluntaria 291 personas residentes de Puerto Rico.

El diseño del estudio sobre las condiciones laborales de los profesionales de Trabajo Social fue uno de métodos mixtos que conllevó la realización de un cuestionario auto administrado

entre marzo y noviembre de 2011, y cinco grupos focales. En el cuestionario participaron 251 profesionales de más de 5 años de experiencia en la práctica no docente. En los grupos focales participaron 18 profesionales del Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Salud Mental, práctica privada o independiente, y un grupo focal con profesionales desempleados.

Ambas investigaciones cumplieron con las condiciones éticas requeridas tanto por el Código de Ética del CPTSPR, así como con estipulaciones nacionales y federales. Los hallazgos que discutiremos de ambas investigaciones están contenidos en los informes sometidos al CPTSPR por las investigadoras (Barreto & López, 2011; López & Rivera, 2014).

Resumen de hallazgos

Derechos humanos

La muestra en el estudio sobre derechos humanos se conglomeró en un 30% en el área metropolitana: Bayamón, Río Piedras, Trujillo Alto y San Juan. Un resumen sobre las características que describen el perfil de esta muestra se presenta en la Tabla 1.

Tabla #1. Perfil de la muestra.

Características sociodemográficas	Perfil representado	Por ciento	Frecuencia
Género	Femenino	68%	197
Orientación sexual	Heterosexual	88%	256
Trabajo	Tiempo completo	68%	159
Ingreso	Menor de \$ 30,000	60%	200
Clase social	Media	79%	231
Plan de salud	Privado	68%	199
Vivienda	Propia	75%	219

En particular, aunque participaron personas entre las edades de 21-81 años, el grupo de mayor participación se encontró entre las edades de 21 a 35 años, con un 40%. Las personas que se encuentran trabajando lo hacen tanto a tiempo completo, parcial, como en empresa propia.

En cuanto al conocimiento de la muestra sobre los derechos humanos, civiles y sociales, encontramos que en su mayoría poseen conocimientos generales sobre el tema. En específico, reconocen que toda persona posee derechos humanos (86%) y el 50% reconoce que el Estado es responsable de velar por estos. La mayoría (80%) señala que son las personas, en su carácter individual, las que deben ser responsables de defender sus derechos. La muestra apunta al reconocimiento y respeto de los derechos humanos de otras personas sobre los propios, afirmando en un 67% que los derechos propios no están sobre los de otros.

La mayoría de las personas conocen que los derechos civiles son derechos humanos (79%). También entienden que los derechos sociales son derechos humanos (66%), pero el 49% de las personas estaban indecisas al respecto y un 15% están en desacuerdo con el reactivo. De igual forma, cuando se les preguntó si los derechos sociales y los civiles eran lo mismo, un 34% de las personas se mostraron indecisas. Las otras personas estuvieron en desacuerdo en un 32% y un 29% estuvo de acuerdo. Casi totalmente un 85% opina que todas las personas tienen los mismos derechos humanos no importa su condición, así sea de pobreza. La muestra estuvo de acuerdo en un 76% con la afirmación de que todos los derechos humanos son importantes y no se puede considerar un derecho con mayor valor que otro.

En la defensa de los derechos civiles responsabilizan mayormente al Estado (79%), y un 63% reconoce que los

derechos civiles no poseen mayor valor que los derechos humanos. Un 76% entiende que el gobierno no puede cambiar los derechos humanos de las personas. Sobre la protección de los derechos humanos, civiles y sociales, un 46% respondió estar en acuerdo con que el Estado los protege, un 40% estuvo en desacuerdo, y se encontró que las respuestas se distribuyeron en mitades. El 81% conoce de la existencia de acuerdos internacionales que obligan a los estados para proteger los derechos consignados y un 79% entiende que estos acuerdos aplican a Puerto Rico.

Derechos sociales

Se preguntó en específico si la salud física y mental, el trabajo, el ambiente sano, la vivienda, la educación, la seguridad y la buena calidad de vida son derechos humanos, encontrando una tendencia a estar de acuerdo (Ver Tabla 2).

Tabla #2. Derechos sociales como derechos humanos

Pregunta	De acuerdo(%)	Frecuencia(f)
34. La salud física y mental es un derecho humano	86	249
35. El trabajo es un derecho humano	83	242
36. El ambiente sano es un derecho humano	92	266
37. La vivienda es un derecho humano	93	269
38. La educación es un derecho humano	97	282
39. La seguridad es un derecho humano	95	276
40. Gozar de una buena calidad de vida es un derecho humano	93	270

Específicamente en la tabla mostramos en negrillas las premisas donde las personas expresaron mayor indecisión, #34 (*f*-21), #35 (*f*-19) y #36 (*f*-12). Para explorar la percepción de la muestra sobre el estado de los derechos sociales como salud, vivienda, medio ambiente sano, seguridad, derecho laboral y educación, desarrollamos varias escalas con respuestas tipo Likert.

Sobre los derechos sociales, exploramos el conocimiento de las personas con relación a la constitucionalidad, el estado o condición de estos y la función del Estado en la protección y acceso de los derechos sociales. En general, la muestra concluye que todos los derechos sociales están contenidos en la Constitución (Ver Tabla 3). En la evaluación sobre el estado o condición del acceso y disfrute de los derecho sociales, encontramos que la muestra divide su opinión en extremos cuando evalúa el estado o disfrute del derecho a la salud física y mental. Un 48% está de acuerdo y el 43% no lo está, pero cuando se exploró sobre la percepción con relación al acceso de los servicios y atender las necesidades de forma equitativa en el país, el 60% estuvo en desacuerdo.

Tabla #3. Constitucionalidad del Derecho

Los siguientes derechos están en la Constitución de Puerto Rico				
	DE ACUERDO		EN DESACUERDO	
	Por ciento	Frecuencia	Por ciento	Frecuencia
Salud	80	228	6	17
Vivienda	64	187	4	11
Medio ambiente sano	63	184	8	23
Seguridad	82	239	5	14
Derecho laboral	79	229	2	5
Educación	92	268	3	5

Sobre el derecho a la vivienda, el 79% afirma que en el país hay dificultades en el acceso y disfrute de este derecho, y el 87% concurre que las personas en el país no disfrutaban de viviendas seguras. Sobre el estado de los derechos laborales evalúan que no hay empleos disponibles en un 86% y el 75% opina que tampoco hay disponibilidad de empleo para las personas que poseen educación vocacional o universitaria.

El 85% responsabiliza a las personas de buscar su vivienda y el 70% entiende que el Estado no cumple con proveer el acceso a la vivienda. Para el 63%, la intervención del Estado en la protección y disfrute del medio ambiente sano no cumple con atender este derecho, aunque el 77% afirma que hay una política pública para la protección del ambiente. El estado del derecho a la seguridad se describe como no accesible para la población, ya que el 65% de la muestra señala no sentirse seguro(a) en el país y un 86% evalúa que este derecho se encuentra en estado de crisis.

El 75% reconoce que el gobierno es responsable de la protección y acceso al disfrute de este derecho, pero el 52% asume que las personas son responsables de su seguridad. El 69% evalúa en forma negativa la gestión del Estado para proteger este derecho, y el 51% opina que este no ofrece asistencia para las personas que pierden el empleo por razones involuntarias. Con relación a la función del Estado en la protección de este derecho, la muestra demostró una tendencia a polarizarse, tanto al reconocer que hay recursos en un 45%, como en el 49% que entienden que no los hay, como en opinar que el Gobierno se esfuerza en garantizar el acceso a la educación en un 46%, y los que opinan lo contrario en un 45%. A pesar de que la muestra opina que hay acceso a la educación, evalúan, en un 81%, que los recursos públicos o infraestructura no poseen las mejores condiciones.

Condiciones laborales del Trabajo Social

La muestra que participó contestando el cuestionario de este estudio fue de 251 personas. El perfil en su mayoría fueron mujeres (83%) entre las edades de 30 a 39 años (32.8%), con licencia permanente (93.6%), estudios de bachillerato en Trabajo Social (80.9%) y un promedio de 15.61 años de experiencia. La mayoría de los(las) participantes se encontraba entre los 30 y los 59 años de edad (89.2%). En el grupo focal participaron 18 personas de varias agencias públicas y privadas.

Específicamente las personas que participaron contestando el cuestionario laboraban en su mayoría en el sector público o agencias gubernamentales en un 77% (188), mientras que el 23% (57) estaban en el sector privado (Gráfica #1).

Gráfica 1
Sector de Empleo

Este estudio de las condiciones laborales tuvo la fortaleza de aportar hallazgos, tanto cuantitativos como cualitativos, que permitieron profundizar en los datos que resultaron de los cuestionarios, lo cual interpretamos como una primera radiografía sobre el tema de las condiciones laborales de nuestra membresía.

Entre los hallazgos más sobresalientes desde la metodología cuantitativa, se destacan que la mayoría de los(as) participantes opinaron que:

- las condiciones laborales de los(as) profesionales de Trabajo Social han empeorado en los últimos años, así como se han precarizado los servicios y recursos de bienestar social, particularmente en el sector público

- el sector privado ofrece mejores condiciones laborales, servicios y recursos que el sector público, a pesar de que los propios participantes que laboran en el sector privado tenían salarios mucho más bajos, menos beneficios marginales y más inseguridad laboral que quienes laboran en el sector público
- a pesar de las precarias condiciones laborales, el desempeño profesional de los propios participantes del estudio es auto calificado como excelente
- la satisfacción con los servicios del Colegio Profesional es regular; sin embargo, la mayoría manifestó satisfacción regular con su propio nivel de participación en el Colegio
- tienen poca o ninguna satisfacción con la supervisión que reciben en sus lugares de empleo
- la educación ha mejorado la preparación profesional, particularmente la educación continua
- los contratos por servicios profesionales propician las peores condiciones laborales y de seguridad de empleo (Barreto & López, 2011).

La Tabla 4 muestra la opinión de las personas encuestadas sobre los retos a enfrentar en los próximos años como profesión, más allá de nuestras condiciones laborales. Estos hallazgos podemos interpretarlos como el reconocimiento de la complejidad del tema que comenzamos a explorar con esta investigación y que deja el inicio de otras líneas o rutas a estudiar.

**Tabla #4. Retos y oportunidades
que tendrá la profesión en los próximos años**

Premisa	De acuerdo N (%)	No sabe o no contestó N (%)
1. Mejores condiciones de trabajo en el sector privado	142 (56.6)	67 (26.7)
2. Fortalecimiento del Colegio	156 (62.2)	72 (28.7)
3. Mejor preparación de los(as) profesionales	195 (77.7)	45 (17.9)
4. Mayor calidad con los servicios ofrecidos por profesionales de Trabajo Social	186 (74.1)	49 (19.5)
5. Peores condiciones de trabajo en el sector público	107 (42.6)	75 (29.9)
6. Mayor competencia por los mismos puestos de trabajo con otros profesionales en el sector privado	157 (62.5)	67 (26.7)
7. Mayor competencia con voluntarios en el sector privado	112 (44.6)	105 (41.8)
8. Mejores oportunidades en la práctica privada	90 (35)	132 (52.6)

Como resultado del método cualitativo, encontramos que las verbalizaciones recogidas a través de los grupos focales coinciden con los hallazgos anteriores. Las personas profundizaron en cuanto a:

- el impacto que los despidos masivos, a causa de la Ley 7 de 2009, aumentaron la carga de trabajo de los(as) profesionales de Trabajo Social
- cómo la precarización de los servicios sociales se utiliza como mecanismo para justificar la privatización de los mismos, pero a la vez la propia privatización de dichos

servicios encarece los mismos, ya que el gobierno paga por lo más barato, no por la mejor calidad

- la preocupación por la calidad de algunos programas de formación en Trabajo Social, que se comparan con “fábricas de hacer TSs”
- las divisiones entre la clase profesional que limitan nuestra capacidad para luchar por intereses del propio colectivo
- preocupaciones principales como el futuro de la profesión y los retos que esta enfrenta (Barreto & López, 2011).

Algunas verbalizaciones importantes sobre el tema de los nuevos rumbos o escenarios laborales en el sector privado muestran preocupaciones importantes para estudiar.

“...no veo muchas [oportunidades para la profesión de TS en el sector privado]. Las veo bien limitadas porque las personas buscan, cuando van a buscar servicios en el área privada, buscan psicólogo. No veo que busquen un trabajador social, y las alternativas que hay de empleo yo las veo en el sector público, y realmente no son las mejores condiciones de empleo. Y lo que veo que es distinto a lo público son los de base comunitaria, y muchos de estos son con propuestas. Y yo lo que veo que cada vez que se desaparecen, aparece un proyecto que dura dos años, te dura tres, desaparece, aparece otro con el mismo nombre, o con un nombre distinto, [...], pero veo cada vez más limitadas las oportunidades de los trabajadores sociales.” (GFF)

Discusión y reflexiones

La investigación sobre el estado de los derechos humanos en Puerto Rico valida la necesidad de que las personas tengamos conocimientos sobre el tema en general, para así poder defenderlos, exigirlos y disfrutarlos. Aunque las personas pueden conocer la igualdad de derechos entre las personas, no pueden precisar cuáles de estos derechos se reconocen en nuestra Constitución. Como país no hemos logrado que nuestra Constitución cumpla con el deber histórico y político de incluir en su escrito todos los derechos humanos. Encontramos que las personas afirman que no todos en este país disfrutan de forma equitativa de los derechos sociales. Para estas personas, las condiciones de los derechos sociales (la salud, vivienda, medio ambiente sano, seguridad, trabajo y educación) no se encuentran en condiciones de calidad, disponibilidad y acceso para los(as) residentes del país.

Para las personas, los derechos civiles están claros, al igual que el reconocimiento de la responsabilidad que debe tener el Estado con estos derechos en particular. El desconocimiento sobre la relación entre los derechos sociales, civiles y humanos, apunta a una condición que facilita que el Estado no cumpla con la función de proveer condiciones para el acceso y disfrute de los derechos sociales. Existe en esta muestra un estado de desconfianza sobre esta función y escepticismo con el gobierno, que apuntan que la defensa de nuestros derechos solo descansa en hombros individuales.

Como señala Rivera (2010), en nuestro país es necesario promover una conciencia crítica mediante la educación, la cual no se ha dado por la historia política colonial y las nuevas políticas neoliberales que promueven precisamente lo que esta muestra afirmó sobre la defensa particular y no colectiva de los derechos humanos. Esto demanda respuestas desde los

colectivos profesionales y reafirma la justificación de trabajar con un Proyecto Profesional que responda a la complejidad de las condiciones laborales, la profesión y la defensa de los derechos de nuestra membresía y de las personas con las que trabajamos, junto con los movimientos sociales y otros organismos profesionales y de la sociedad civil. La desprofesionalización o ruptura con el Trabajo Social como profesión, la focalización y precarización de los servicios sociales y el desplazamiento del Trabajo Social al sector privado como alternativa para mercantilizar los servicios, traen consigo nuevas tensiones y, a su vez, mayor vulnerabilidad de los derechos humanos para todos los sujetos implicados.

Por otra línea de investigación, al igual que otras profesiones, el Trabajo Social se encuentra ante mayores condiciones de precariedad e inseguridad laboral. El estudio resumido en este artículo muestra que, a pesar de relativamente buenos salarios y beneficios marginales, los recursos y las condiciones de trabajo, particularmente en el sector público, han empeorado, mientras crece un sector que es contratado por servicios profesionales, sin beneficios marginales y en mayores condiciones de inseguridad laboral.

Ante las actuales condiciones laborales, se empobrece la calidad de los servicios que, en virtud de derechos sociales, fueron conquistados por la clase trabajadora y diversos sectores de la sociedad civil a través del Siglo XX. Hoy estos se ven amenazados por el impacto del neoliberalismo sobre la política social. Es por ello que se hace absolutamente urgente y necesario el impulso de un Proyecto Profesional capaz de organizar el colectivo para incidir sobre la política social y la defensa de mejores condiciones de empleo, incluyendo la justicia salarial. Este proyecto viabiliza también la defensa de los derechos sociales que, como aseguran los encuestados,

hoy no están disponibles para los sujetos sociales con quienes trabajamos, pero lo están para el colegiado profesional. Como expresó una de las colegas respecto al rol de Colegio en los grupos focales: *“Yo creo que debe ser un rol de unir. Unir la academia, unir la profesión. Como dice por ahí ‘divide e impera’, ¿verdad? Mientras estemos divididos, cada cual por su lado, no vamos a lograr nada como clase profesional”* (GFD). Hoy es este uno de nuestros mayores retos: tensionar nuestras diferencias para develar mayor análisis de la complejidad en la que se inserta la profesión, pero procurar a su vez la unión de voluntades para la consolidación de una profesión que responda acertadamente a nuestra presente realidad social.

A partir de este trabajo, surgen preguntas e interrogantes tales como: ¿Cuáles son los intereses del mercado con la privatización de servicios sociales antes ofrecidos por el Estado, en materia de política social? ¿Cómo esto incide en la práctica de un Trabajo Social fundamentado en una perspectiva de derechos humanos y transformación social? ¿Cuál será el rol de nuestra profesión para que prevalezca en la defensa de nuestros propios derechos como clase trabajadora, así como en el fortalecimiento de la autonomía de sujetos cuyos derechos se han vulnerado? Estas y otras preguntas nos guían a retos en la investigación de estos temas, pero también nos enfrentan a los retos que poseen para nuestro colectivo y nuestro Proyecto Profesional.

Sobre todo, la pregunta urgente hoy es: ¿Cómo vamos nosotros como profesionales de Trabajo Social a hacer prevalecer nuestros principios éticos ante las condiciones y deformaciones impuestas por el proyecto neoliberal, neo-conservador y fundamentalista?

Las tensiones que han surgido y surgirán a partir de la discusión del proyecto ético-político que necesitamos son

absolutamente necesarias y deben enfocarse en el análisis crítico de nuestra situación como profesión insertada en la dinámica compleja de las relaciones sociales, que apunte a nuevas alternativas y propuestas desde el colectivo, desde la unión, la solidaridad y la pluralidad. Esto nos lleva a ponderar que la colectividad es fundamental para darle a la profesión y su representación el sustento y organización necesarios para enfrentar la adversidad de donde quiera que provenga.

Pensar que en la gestión individual, el ejercicio liberal de la profesión y el “sálvese quien pueda” está la solución a nuestros dilemas profesionales, es andar por el camino de desarraigar la profesión de su vínculo con los derechos humanos que tantas luchas y vidas costaron. Solo la fuerza de un colectivo unido y organizado será capaz de defender nuestras propias conquistas y proyectos futuros, y de colocarnos en posición de responder a los reclamos del interior del gremio, así como a los de los movimientos sociales emergentes. Pero eso no lo logra una Junta sola con sus comisiones y capítulos, no lo logran 50 o 100 profesionales en un Colegio con una matrícula de sobre 5,000 profesionales. Para eso hace falta que una mayoría sustancial de nosotros(as) nos organicemos en esta lucha y en este colectivo profesional; que asumamos, dentro de nuestros recursos y posibilidades particulares, un rol activo e intencionado en el interior del Colegio, en la construcción de un Proyecto Profesional amplio y pluralista, así como un proyecto de país cónsono con nuestros más valorados principios éticos. Solo así seremos capaces de responder a la actual crisis social.

Referencias

- Abramovich, Victor., & Cortis, Christian. (1997). *Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales*. Recuperado de: http://miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Exigibilidad_de_los_DESC_-_Abramovich.pdf
- IASSW, AIETS & ICSW. (March, 2012). *The Global Agenda for social work and social development commitment to action*.
- Amnistía Internacional. (2010). *El estado de los derechos humanos en el mundo*. Amnistía Internacional: Autor.
- Barreto, Esterla. (25 de octubre, 2009). *Re-estructuración de las políticas sociales ¿Por qué y para quiénes? Ponencia presentada en la ---Asamblea Anual del Colegio de Profesionales del Trabajo Social*. Ponce, Puerto Rico.
- Barreto, Esterla. & López, Mabel. (2011). *Estudio: condiciones laborales de los y las profesionales de trabajo social*. Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.
- Berlingeri, Belinda. & Negrón, Angélica. (2007). *La satisfacción de los/as trabajadores sociales en el empleo: estudio descriptivo sobre el nivel de satisfacción laboral y sus implicaciones para la práctica profesional de los y las trabajadores sociales colegiados con un año o más de empleo y cursando estudios postgraduados en trabajo social en la Escuela Graduada Beatriz Lasalle en Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, a diciembre de 2007*. Tesis de maestría. Escuela Graduada de Trabajo Social, UPR.
- Bolívar, Ligia. (s.f.). *DESC: Derribar mitos, enfrentar retos, tender puentes*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Serie Estudios Básicos, Vol.V. pp.85-136.

- Cabrera, Jesús. (2012). *Apuntes para fundamento de un proyecto ético-político profesional en Puerto Rico*. Revista Voces desde el Trabajo Social, 1.CPTSPR
- Rivera Centeno, Gloria. (2010). *Re-construcción del proyecto profesional: ¿Qué propuestas queremos?* Revista de Servicio Social, 1.p.88-94.
- Colón, Milagros. (25 de octubre, 2009). *Trabajo Social Crítico: Una redistribución de los que somos y de lo que podemos ser*. Ponencia presentada en Asamblea Anual del CPTSPR. Ponce, PR.
- Colón, Milagros. (2010). *El Trabajo Social Crítico: Una redefinición de lo que somos y lo que podemos ser*. Revista de Servicio Social, 1, pp. 95-111.
- Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. (Noviembre, 2011). *Estudio: Condiciones Laborales de los y las Profesionales de Trabajo Social*. San Juan: Autor.
- El Nuevo Día. (11 de junio de 2014). *Asesinan a un hombre en terreno baldío de Anasco*. El Nuevo Día Digital. Recuperado de <http://www.elnuevodia.com/asesinanaunhombreenterrenobaldiodeanasco-1791433.html>
- El Nuevo Día. (11 de junio de 2014). *Consejo General de Estudiantes se opone a recortes en la UPR*. El Nuevo Día Digital. Recuperado de <http://www.elnuevodia.com/consejogeneraldeestudiantesseoponearecortesenlaupr-1791390.html>
- El Nuevo Día. (6 de junio de 2014). *Líderes sindicales siguen reunidos en La Fortaleza*. El Nuevo Día Digital. <http://www.elnuevodia.com/lideressindicalessiguenreunidosenlafortaleza-1788651.html>

Eroles, Carlos. (Ed.). (1997). *Los Derechos Humanos: Compromiso ético del Trabajo Social*. Buenos Aires: Espacio Editorial.

Eroles, Carlos. (2007). *¿Qué implica la profesionalización del trabajo social en el contexto de las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales? En Margarita Rozas (Ed.), La profesionalización en Trabajo Social*. Buenos Aires: Editorial Espacio.

Ezquivel, Freddy. (2004). *¿Cuestión Social?: Algunas Mediaciones Determinantes para su estudio en la formación profesional*. Ponencia presentada en el XVIII Seminario de Escuelas de Trabajo Social. Recuperado de <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-018-008.pdf>

Fredianelli, Graciela. (2007). *Las condiciones del ejercicio profesional. En Margarita Rozas (Ed). La profesionalización en trabajo social: Rupturas y continuidades, de la reconceptualización de proyectos ético-políticos*. Argentina: Espacios.

Ley núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico.

López, Mabel. & Rivera, Jessenia. (2014). *Informe de Investigación sobre la situación de los derechos humanos en Puerto Rico: un acercamiento a los derechos sociales*. San Juan: CPTSPR.

Montaño, Carlos. (2004). *Hacia la construcción del Proyecto Ético-Político Profesional crítico*. XIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, ALAETS, Costa Rica

- Rivera, S., Rodríguez, N. & Serrano, C. (2013). *“Mobbing” Impacto e implicaciones psicológicas, organizacionales y familiares del acoso laboral en profesionales de Trabajo Social del Departamento de la Familia, Región de San Juan a mayo 2013*. Tesis de maestría, Escuela Graduada de Trabajo Social, UPR.
- Rivera Ortega, Jessenia. (2012). *La educación popular, una alternativa para educar en derechos humanos, el caso de Puerto Rico*. Ecuador: Corporación Editora Nacional.
- Reglamento del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico* (2013). Artículo 58. CPTSPR: Autor.
- Resolución #5. (2008) Asamblea Anual del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, Ponce PR.
- Roa, V, Rosario, H. & Vélez, L. (2013). *La administración de Trabajo Social en agencias públicas en el contexto de la crisis económica. Hacia la transformación de los conocimientos, roles, estrategias en el siglo XXI en el área metropolitana de San Juan, Puerto Rico, a mayo de 2013*. Tesis de Maestría, Escuela Graduada de Trabajo Social, UPR.